

LA GOBERNABILIDAD EN LOS TIEMPOS DEL BACHELETISMO

Francisco Figueroa • Nicolás Romero

PRESIDENTA 2014-2018



RESUMEN:

Se profundiza el agotamiento del sistema político producto de su permeabilidad a la injerencia del poder empresarial y a su incapacidad para reconstruir pactos con fuerzas sociales subalternas. El gobierno de Michelle Bachelet queda prisionero de estas tendencias y al negarse a enfrentar la crisis de representación mediante la conformación de un nuevo pacto social, facilita la reconstitución de fuerzas conservadoras y su reconquista de protagonismo político. Parafrasear al revolucionario francés Saint-Just puede ofrecer una decidora máxima sobre el actual momento político: "Quien hace reformas a medias no hace sino cavar su propia tumba". Estas dinámicas repercuten en un continuo proceso de deterioro de la democracia, el cual plantea significativos desafíos a las fuerzas sociales y políticas que apuestan por una ampliación sustantiva de la democracia.

PALABRAS CLAVE:

- Poderes fácticos.
- Democracia.
- Reformas.
- Acuerdos.
- Gobernabilidad.

El primer año del segundo gobierno de Michelle Bachelet llega a su fin en medio de un clima auspicioso para los intereses dominantes y desalentador para las mayorías populares. Las tibias expectativas de apertura de un nuevo ciclo político –pero expectativas al fin y al cabo– de una parte de la sociedad chilena, se desvanecen semana a semana. En su actual gobierno, la Concertación ha renovando el viejo hábito de gobernar en estrecho acuerdo con los empresarios y algunas de las fuerzas más conservadoras del país, dejando en evidencia la instrumental adopción del discurso de los derechos sociales y la ampliación de la democracia

En anteriores versiones de estos Cuadernos se ha identificado la “colonización empresarial de la política”¹ como la dinámica que explica el curso de estos acontecimientos. Los poderes fácticos estimulan discursos para ocultarlo, como aquel que explica todo por la falta de “liderazgo” en La Moneda. También los partidos, en su caso, para disfrazar de proyectos “reformistas” y “conservadores” en pugna lo que en realidad es su insignificancia política. Pero, en el plano de las relaciones de fuerza más determinantes del curso político chileno, son los grupos fácticos y empresariales quienes adquieren un notorio protagonismo en la definición del carácter y los alcances de las reformas. Allí la explicación de la “baja intensidad” del prometido reformismo de la Concertación y su incapacidad de detener la agudización de la crisis de representación política.

Este entendimiento entre la Concertación y el empresariado entraña dos novedades. La primera es que, desde la mirada del poder, significa la prescindencia –de un modo nunca antes visto durante la transición– de los partidos y particularmente de la derecha política para el entendimiento entre el gran empresariado y el Estado. La segunda es que, desde la mirada de los dominados, la obsecuencia de la Concertación ante el poder empresarial y la persistencia de su culto por el mercado, aún en su forma Nueva Mayoría, significan el quiebre de la alianza social que irrumpió en las movilizaciones sociales de 2006 y 2011 y que, entre otras cosas, terminó favoreciendo el propio ascenso de la Concertación al gobierno.

El carácter social de la alianza dirigente, de su clase política y económica, queda en evidencia con la primacía conquistada durante la segunda mitad de 2014 por las voces más conservadoras de la sociedad chilena. Con una rapidez impensada, la preocupación por la incertidumbre sufrida por los sectores populares ante la extendida privatización de sus condiciones de vida, fue reemplazada por la preocupación ante las consecuencias que eventuales reformas podrían acarrear para la mantención de los privilegios de las elites económicas y políticas del país. De esta forma, la agenda de los grupos económicos, la Iglesia y las burocracias partidarias copan la discusión pública y logran sobredeterminar el andar del conjunto del sistema político.

Esta reinserción de las fuerzas conservadoras es facilitada también por la relación establecida entre la Concertación y el campo de fuerzas subalternas que bregan por cambios democráticos. En lugar de convocarlas a una modalidad de pacto social, el Gobierno renuncia a estrechar lazos con sus organizaciones optando por ignorarlas o bien, allí donde puede, corporativizarlas. Un papel fundamental en la implementación de esta política desempeñan los comunistas, conteniendo la movilización de fuerzas sociales por fuera de los marcos establecidos en el itinerario de La Moneda. Así, la izquierda histórica subsumida en la Nueva Mayoría queda anulada políticamente y limitada a un papel secundario de contención del conflicto social.

1 Boccardo, G. & Romero, N. (2014, agosto). La nueva política de los acuerdos: El Ejecutivo y el empresariado. *Cuaderno de Coyuntura*, (4), pp. 4-13.

I. PODERES FÁCTICOS: MUERTOS QUE GOZAN DE BUENA SALUD

El regreso de la Concertación a La Moneda ha estado animado por el relato del inicio de un “nuevo ciclo político”. El concepto, acuñado por diversos intelectuales del bloque durante la pasada campaña presidencial, busca tanto describir una situación política como indicar la dirección por la cual navegar en ella. Así, la expresión política de esta nueva situación social sería precisamente la Nueva Mayoría. Una vez en el poder, sin embargo, la realidad se ha encargado de demostrar su discordancia con este optimista relato, iluminando, en cambio, el indisimulado desfile de arreglos del Gobierno con distintos sectores del empresariado en las más diversas áreas.

La presencia del poder empresarial en el comando de decisiones políticas alcanzó un alto nivel de efectividad en 2014. Especialmente expresivos de esto han sido el desenlace del debate tributario y el desarrollo de la agenda energética². La política tributaria en régimen ha resultado significativamente más conveniente, por ejemplo, para el capital financiero. Entre enero y septiembre de 2009, las utilidades de la banca crecieron en un 42,9%, mientras sólo en septiembre subieron en 75,56%. El resultado se vio influenciado –reconoció la Superintendencia de Bancos– por la puesta en marcha de la reforma tributaria, pues “implicó un mayor resultado proveniente de impuestos (a raíz de los ingresos generados por el aumento de los activos netos por impuestos diferidos)”³.

Con todo, la efectividad de la presión empresarial sobre la política no le inyecta legitimidad al sistema político. Ocurre, más bien, lo contrario. No obstante logra influir en las decisiones del Ejecutivo y el Parlamento, lo hace a un alto costo. Sin duda el hecho que mayor impacto ha generado en este plano fue el escándalo que involucró al grupo Penta (holding con negocios en los rubros de la previsión, los seguros, las finanzas, la salud, los inmuebles y la educación) en el financiamiento ilegal de campañas políticas y la evasión de impuestos por esa vía. Si bien la principal afectada fue la UDI, el escándalo salpicó al caudillo pro-empresarial Andrés Velasco y a otras figuras de la Concertación, motivando primero airadas recriminaciones dentro del mundo político pero, a los pocos días, un súbito y denso manto de silencio transversal.

El caso Penta, sin embargo, alude únicamente a la dimensión más escandalosa de la subordinación empresarial de la política, aquella que supone la violación de la débil legalidad vigente. Lo cierto es que los grandes grupos económicos no necesitan violar la ley para financiar la política, por el contrario, la ley lo permite e incentiva. Es así que a propósito del “Pentagate” el propio financiamiento de la política se develó como la demostración más nítida de la escasa autonomía ostentada por los partidos respecto del poder económico. Gracias a la ley sobre gasto electoral promulgada por el gobierno de Ricardo Lagos y que rige desde 2003, hoy la principal fuente de financiamiento de la política son los aportes privados y, entre ellos, los reservados. En las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013, 31 mil millones de pesos fueron aportados por privados y sólo 20 mil millones por el Estado. El 90% de los aportes privados a campañas, en tanto, fue secreto, sumando aportes reservados y anónimos⁴.

2 Más detalles pueden ser revisados en artículos de Equipo de investigación Nodo XXI. (2014, agosto). La Reforma Tributaria de Bachelet. Alcances de una reforma de baja intensidad. *Cuaderno de Coyuntura*, (3), pp. 42-54; (2014, octubre). Una Agenda Energética para el nuevo ciclo de acumulación empresarial. *Cuaderno de Coyuntura* (4), pp. 32-42.

3 La Segunda. (2014, 6 de noviembre). Utilidad de los bancos crece 42,9% entre enero y septiembre: US\$2.203 millones. *La Segunda*. Recuperado de: <http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/11/973645/Utilidad-de-los-bancos-crece-429-entre-enero-y-septiembre-US3203-millones>

4 Ciper. (2014, 8 de octubre). El 90% de los aportes privados a campañas es secreto. *Ciper*. Recuperado de: <http://ciperchile>.

El caso Penta desató diversas reacciones. La más bullada, sobre todo en relación al silencio de los partidos, fue la de Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien descartó responsabilidades judiciales y éticas del empresariado, trasladándolas a la clase política. “Aquí se ha dicho que las empresas están preocupadas de darles dinero a los políticos, pero es todo al revés; hay un desfile de los políticos por las empresas para que les donen dinero, esa es la verdad”⁵, aseguró Santa Cruz. El llamado del dirigente empresarial a los políticos al orden y la prudencia ilustra el grado de conciencia del empresariado respecto de los riesgos que implica la desembozada cercanía del sistema de partidos al mundo económico para la legitimidad de ambas esferas.

La colonización empresarial de la política y del Gobierno es efectiva en el corto plazo, pero deja abierta la pregunta por su impacto en el largo. A juzgar por la sostenida caída en la aprobación popular de las instituciones, esta dinámica parece implicar un alto costo para la legitimidad de la democracia. En la medida que el Estado es percibido como un instrumento al servicio de intereses particulares, no solo pierde legitimidad, sino también capacidad de convocar activamente a las facciones sociales excluidas de la acción política estatal. No obstante lo normalizado de la intromisión empresarial en las decisiones de las instituciones públicas, esto puede significar un “triumfo pírrico” de los sectores dominantes sobre la democracia, uno que debilita la democracia e hipoteca la capacidad de las propias instituciones para lograr consentimiento de masas con el régimen.

En la coyuntura destaca también el complejo momento que atraviesa la Iglesia Católica. Enfrenta una de las peores crisis en su historia reciente. Las situaciones de abuso sexual son la principal razón de su exposición en los medios, mientras decae su influencia entre la sociedad civil, a manos de la secularización de vastos sectores de la población (especialmente medios) y el avance de las iglesias evangélicas. Sin embargo, este debilitamiento contrasta con su todavía probada capacidad de incidencia en ciertas decisiones públicas. Dicha capacidad fue demostrada en medio de la tramitación de la reforma educacional, tema de interés para la Iglesia en tanto principal sostenedor privado a nivel escolar en Chile.

En medio de las críticas que generó entre los sostenedores privados el intento del Gobierno por erradicar la posibilidad de lucro en el sistema escolar, la Iglesia operó a través de la Conferencia Episcopal para salvaguardar sus intereses. Su esfuerzo logró modificar el sistema de arriendos de colegios abriendo la puerta para un lucro regulado. Esta medida, aunque rechazada en la Cámara de Diputados, es auspiciada por el Gobierno. Pero la presión de la Iglesia no acaba allí. De cara a la tramitación de los proyectos de ley que intentan acabar con el lucro, el copago y la selección en el Senado, la Iglesia volvió a atacar exigiendo un “gran acuerdo” por una reforma “sin detrimento y menoscabo patrimonial de los sostenedores”⁶. La ofensiva recibió un espaldarazo de La Moneda, que a través de los ministros de Interior y Educación salió a renovar los votos de acuerdo con la Iglesia, destacando que las escuelas recibirán los mismos aportes del Estado sin importar su condición pública o privada.

cl/2014/10/08/el-90-de-los-aportes-privados-a-las-campanas-politicas-es-secreto/

5 Estado Nacional. (2014, 28 de septiembre). *Televisión Nacional de Chile (TVN)*.

6 Conferencia Episcopal de Chile. (2014, 18 de noviembre). Una reforma educacional por el bien de Chile. *Conferencia Episcopal de Chile*. Recuperado de: http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=4335

Una similar preocupación por exponer credenciales de prudencia al empresariado ha mostrado el ministro Alberto Arenas desde la cartera de Hacienda. No obstante la campaña comunicacional emprendida para enlodar su gestión y culparla de la desaceleración económica, el Gobierno ha decidido recomponer las relaciones entre su política económica y los gremios empresariales. Esta actitud, en lugar de calmar los ánimos de sus dirigentes, parece en cambio confirmarles la efectividad de sus presiones. Mientras en la última Enade Arenas no dudó en calificar a los empresarios como “el corazón de la economía”, prometerles una reanudación de la alianza “público-privada” y “certidumbre y estabilidad” de cara a las reformas laborales, Andrés Santa Cruz mantuvo a firme la crítica del empresariado y condenó cambios que “sólo le dan el gusto a los que gritan”⁷.

II. SISTEMA POLÍTICO: PUGNAS INSUSTANCIALES Y BUROCRATISMO

No sólo en educación los poderes fácticos consiguen ser escuchados oportunamente por el Gobierno. Los avances de las iniciativas del Ejecutivo y sus anuncios en materia tributaria, laboral, de salud y energética han contado con el beneplácito de amplios sectores del empresariado. Las discusiones políticas más decisivas, de hecho, parecen ocurrir dentro del debate empresarial antes que con el resto de actores de la sociedad civil. Las orientaciones y las velocidades de las reformas tienen que ver, en última instancia, con los grados de regulación estatal de los mercados y su fortaleza con el respaldo o rechazo que concitan entre distintos sectores del empresariado.

En un contexto de debilitamiento del sistema político, las mediaciones entre el Estado y otros poderes ya no pasan principalmente por los partidos sino por las dirigencias del gobierno de turno. Al no haber nada más trascendente que la administración del aparato estatal, las burocracias comienzan a tener un poderío sin precedentes en la historia de la transición. Si algún contenido tiene el “bacheletismo” es precisamente el de ser una fórmula burocrática fortalecida por su control de las mediaciones con diversos poderes y su relativa autonomía del sistema de partidos. Dicha condición puede parecer prometedora considerando el descrédito de este último, pero desde el punto de vista de la democracia no representa precisamente un avance.

La fórmula del bacheletismo se compone de dos elementos. Por un lado, acoge a una camada de expertos que pueblan la administración pública con renovados aires de sofisticación intelectual e independencia política, pero sin imaginativa política para resolver las deudas democráticas y sin efectivo poder de incidencia. Estos expertos, como muestran las agendas de educación, salud y más recientemente transporte, buscan conciliar el mercado con las expectativas de mayor igualdad social por la vía de políticas públicas cubiertas de la retórica de los derechos. Se promueve la inclusión en la educación escolar, pero manteniendo el financiamiento vía vouchers; se pretende la mejora del sistema de salud regulando a las Isapres pero destinando todavía la mayoría de los recursos públicos a sus arcas privadas; se estudia extender el Metro de Santiago a través de la concesión de nuevas líneas. De esta forma se busca mantener la centralidad asignada al mercado para la provisión de servicios sociales o la organización de la producción de muchos bienes, concentrándose únicamente en la alteración de los criterios de administración. Detrás de la retórica de los derechos sociales, prevalece una política de sello tecnocrático y pro mercado.

7 EMOL. (2014, 27 de noviembre). Enade 2014: Tras intervenciones de Arenas y Santa Cruz termina sesión inaugural. EMOL. Recuperado de: <http://www.emol.com/noticias/economia/2014/11/27/691917/minuto-a-minuto-siga-todos-los-detalles-del-encuentro-de-empresarios-enade-2014.html>

Los partidos políticos, en tanto, ya no cumplen papel alguno de mediación entre los intereses empresariales y el Estado, menos aún entre éste y fuerzas sociales excluidas de su esfera. Son presa, en cambio, de pugnas políticamente insustanciales, carentes de proyectos y motivadas principalmente por aspiraciones personales o sectarias de encumbramiento a través del aparato estatal. Lo anterior dificulta el itinerario trazado por el propio Ejecutivo al abandonar la defensa de las reformas en aras de precoces preocupaciones electorales, esto es: carcome al sistema político desde dentro. El bi-coalicionalismo, así, consolida su incapacidad de dar una respuesta sustantiva al malestar, ahondando la crisis de legitimidad del sistema democrático en lugar de contenerla y mucho menos revertirla.

Las dificultades en la implementación del programa de Gobierno generan crecientes fricciones al interior de la alianza gobernante. No obstante, se trata de pugnas en las que su alta figuración mediática contrasta con su escaso contenido sustantivo. Estas pugnas adoptan la forma de polémicas entre partidos, al interior de partidos o transversales a propósito de políticas específicas. Dentro de las primeras, la más mediática ha sido la tensión entre la DC y el PC. Pero en ella no se confrontan proyectos de sociedad, ni siquiera estrategias sobre cómo conducir a la coalición o al gobierno. La polémica desatada a propósito de las declaraciones del embajador comunista de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, y los dichos de la diputada Karol Cariola, ilustran el vacío de estas tensiones. Comenzaron con acusaciones mutuas por la falta de lealtad con “el compromiso adquirido por la Nueva Mayoría y la Presidenta con la ciudadanía” y finalizaron sin referencia a acuerdo o decisión política alguna.

La ausencia de proyectos y orientaciones partidarias definidas se traslada también como desorden a las tensiones producidas a propósito de los proyectos de ley en discusión, así como a las fricciones al interior de los mismos partidos. La línea que separa, por ejemplo, a detractores e impulsores de la reforma educacional encabezada por el ministro Eyzaguirre y su equipo, cruza a los partidos de la coalición en lugar de respetar sus contornos. Es así que parlamentarios demócratacristianos o socialistas han sido más críticos que muchos pepedés o comunistas a las concesiones que el proyecto hace al mercado educacional⁸. Mientras la senadora socialista Isabel Allende encabezó una indicación legislativa para diluir las diferencias entre universidades públicas y privadas respecto a su financiamiento, el también senador socialista Carlos Montes respaldó un proyecto opuesto tendiente a reconstruir la educación pública. Mientras diputados de diversos sectores protestan contra las concesiones de Eyzaguirre a la Iglesia y los sostenedores privados, han sido los diputados comunistas sus más férreos defensores.

Pero la insustancialidad de la discusión interna del sistema político no es principalmente carencia de debate político, sino expresión del tipo de confrontaciones que lo movilizan: pugnas internas de burocracias desancladas de intereses sociales colectivos, que apelan a éstos únicamente como cantera de votos o clientela. Sin proyectos que defender ni fuerzas sociales que representar, las fuentes de distinción e identidades se diluyen y se tienen que crear otras nuevas. Es de esta manera que surge la pretendida batalla entre “reformistas” y “conservadores” del bloque, todos ellos apelando a la figura del “programa” como fundamento y a la “lealtad con la Presidenta” como justificación.

8 Consorcio de Universidades Estatales. (2014, 29 de octubre). Parlamentarios junto a rector Aldo Valle exigen que educación pública se financie en un 100%. *Consorcio de Universidades Estatales*. Recuperado de: <http://www.uestatales.cl/cue/?q=node/4206>

La derecha, en tanto, sigue incapaz de sentar cabeza. Su intento por capitalizar la movilización de las PYME y la de padres y apoderados no ha logrado frenar su drástica caída en el apoyo ciudadano. La novedad desde este campo radicaría en la eventual emergencia de un polo de “derecha liberal” a partir de desgajes de la derecha (Amplitud y Red Liberal) y la Concertación (Fuerza Pública). Sin embargo, poco y nada se diferencia este supuesto liberalismo del neoliberalismo reinante. Les pesa la reducción del proyecto liberal a las banderas del liberalismo económico y su íntima conexión con poderes en absoluto modernizadores. Con todo, antes incluso de ser puestos a prueba como propuesta política, tropiezan con el involucramiento de su principal figura, Andrés Velasco, en el caso Penta, quedando así subsumidos en la crisis general de la política. No logran tampoco atraer a la DC a una alianza “de centro”.

Marco Enríquez-Ominami, en tanto, aparece empatado junto a la presidenta Bachelet como el personaje político mejor evaluado según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Sin embargo, se resta de tomar posiciones ante los principales dilemas de la coyuntura. Opta, en cambio, por evadir las disputas abiertas y adelantar la discusión electoral proponiendo un sistema de primarias único del progresismo y la centroizquierda. Con esto busca evitar confrontarse con una Concertación a la cual desea reingresar, sobre todo con Bachelet, a quien adjudica un “conmoveror”⁹ impulso transformador y a cuya disposición ha dicho poner todo su “capital político”¹⁰. Pero su silencio ante polémicas como la educacional, la socio-ambiental o la desatada por el caso Penta, le restan capacidad de relacionarse con fuerzas sociales excluidas del juego político y de distinguirse de los actores políticos tradicionales. No parece existir un compromiso del progresismo por ampliar el carácter social de la política incorporando a nuevos intereses. Su apuesta, de seguir enclaustrada en las dinámicas internas de un sistema político ensimismado, no garantiza la proyección política de su popular imagen.

En general, Concertación y Derecha parecen no tener conciencia del daño estructural que afecta al sistema político y la insustancialidad de sus pugnas internas. Por el contrario, casos como el congelamiento de las comisiones investigadoras del Congreso sobre los casos Penta y Arcis, en el que a vista y paciencia de la opinión pública comunistas y gremialistas desistieron de investigar los eventuales casos de corrupción en los que estaban involucrados, son precisamente indicativos de la nula consideración de los partidos al daño que la corporativización de la política supone para su propia legitimidad

Esta evadida realidad ha quedado plasmada en los resultados de la última encuesta del CEP, que ilustra un incremento en la desaprobación del bi-coalicionalismo, del Gobierno y de la propia presidenta Bachelet. Mientras la aprobación de la Alianza alcanzó un magro 16%, la Concertación consiguió un igualmente bajo 24%. La evaluación positiva del Gobierno se redujo en doce puntos para llegar al 38%, mientras su desaprobación se empujó al 43%. La aprobación de Michelle Bachelet, en tanto, bajó trece puntos para ubicarse en un 50%. La figura de Bachelet comienza así a perder su independencia para ser evaluada críticamente, como el resto del sistema político. Así, la del último noviembre es la aprobación más baja que ha tenido no sólo durante su actual gobierno sino también considerando el periodo 2006-2009.

9 Desde Zero (2014, 20 de noviembre). Presentación de Patricio Fernández y Rafael Gumucio. *Radio Zero*.

10 Saldivia, C. (2014, 7 de diciembre). Yo ofrezco todo mi capital político y lo pongo a disposición de Bachelet para desentramar las reformas. *El Mercurio*. Recuperado de: <http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-12-07&dtB=31-01-2015%200:00:00&PaginaId=4&bodyid=10>

III. GOBERNABILIDAD VÍA CORPORATIVIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES

El diseño del bacheletismo requiere, como también los anteriores gobiernos de la Concertación, de una política de gobernabilidad, es decir, de una limitación del ejercicio de la democracia en aras del orden. Si durante la transición los principales medios para facilitarla fueron la desarticulación y la represión de las organizaciones sociales, hoy se diversifican. En lugar de convocar a las fuerzas subalternas que bregan por cambios democráticos a un pacto social, el Gobierno renuncia a estrechar lazos con sus organizaciones optando por ignorarlas o bien, allí donde puede, corporativizarlas. Un papel fundamental en la implementación de esta política desempeña el PC, conteniendo la movilización social que escapa del itinerario establecido por el Gobierno. Por este motivo, no es forzoso preguntarse si acaso está definitivamente comprometida su proyección como fuerza transformadora (ya en cuestión con su incorporación a una alianza neoliberal).

Se trata de una opción deliberada y derivada de la renuncia a estimular el respaldo social organizado a las reformas. La decisión, sin embargo, es contradictoria; por un lado se propagandiza contra los poderes fácticos, desatando su reacción, y por otro no se busca diálogo ni apoyo de los actores movilizados. Esto repercute en la viabilidad de imprimirle un carácter más profundo a las reformas, dejándolas abandonadas al cortoplacismo de las burocracias de gobierno y a las presiones de la elite económica.

Frente aquellos movimientos con capacidad de expresión autónoma, en tanto, la apuesta oficialista es neutralizarlos. Conocidas han sido las intervenciones en el movimiento estudiantil y, más recientemente, en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y en el Colegio de Profesores. En ambos casos, destaca el papel desempeñado por los comunistas como principales responsables de mantener a raya a los movimientos sociales. La apuesta no ha sido efectiva y ha redundado en una sostenida pérdida de fuerza del PC en el mundo social organizado. Pero también en una agudización de las tensiones internas de dichos actores, como ilustra la situación dentro de ambos gremios.

Intentando evitar la movilización anual de los empleados fiscales, el Gobierno constituyó la denominada Mesa del Sector Público encabezada por la CUT y compuesta por las organizaciones de trabajadores sobre las que suponía capacidad de control. Ingenuamente, el Ejecutivo presentó un reajuste nominal del 6% pero que representaba sólo un 0,5% real. Luego de la firma de 12 de las 15 organizaciones convocadas, incluida la CUT, el ministro Arenas manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado. A continuación, la ANEF presidida por el socialista Raúl de la Puente, la Confenats y la Asemuch, hicieron un llamado a un paro indefinido del sector público, quebrando públicamente con la dirección concertacionista. Mientras tanto, más de 40 mil profesores colegiados y no afiliados al Colegio se han movilizado a lo largo del país por respuestas más profundas y creíbles del Gobierno a sus demandas, en abierta rebeldía contra una dirigencia nacional controlada por los comunistas y la Concertación. Frente a esta masiva movilización que de manera inédita ha logrado sumar a una amplia franja de profesores que en su mayoría no se encuentran colegiados, la dirección comunista ha intentado deslegitimar la movilización y desplazar de su resolución a las bases movilizadas, aceptando la contra propuesta del Gobierno sin la realización de una acordada consulta democrática.

La descrita no es sólo la crisis más aguda que ha sufrido el gremio de los profesores en la última década. Es también la crisis del tipo de relación que busca establecer el Gobierno con los actores sociales subalternos. No habiendo transcurrido siquiera un año de administración, la Concertación ha perdido un terreno significativo entre estudiantes, profesores y trabajadores organizados. A ello se suma el descontento de las organizaciones socio-ambientales por el protagonismo de grupos empresariales como el liderado por la familia Luksic en la elaboración de la agenda energética, siendo la defensa gubernamental del proyecto Alto Maipo el ejemplo más ilustrativo. En sucesivas ocasiones, el ministro de Energía, el ministro de Hacienda y la propia Presidenta, han respaldado públicamente el proyecto a pesar de los reparos de las organizaciones que apuntan a las negativas consecuencias socio ambientales y a la estrecha relación existente entre el actual ministro de Energía y el grupo Luksic.

Si lo anterior redundará en una crisis de control social, desatando ya no sólo desencuentros aislados entre gobierno y actores sociales sino movilizaciones, es algo que está lejos de poderse prever hoy. Sin embargo, da cuenta de la incapacidad de la Concertación para recomponer lazos con las fuerzas sociales subalternas más significativas. Queda así en entredicho la posibilidad de emprender reformas democratizantes en el actual periodo presidencial prescindiendo de la participación de nuevos y más amplios intereses en la política. No se ve cómo hacer posible la promesa de más democracia limitando la deliberación política a los mismos intereses y actores que la han copado las últimas décadas.

Desde que se configuró, la Nueva Mayoría fue promovida como una alianza política distinta a la Concertación por haber incorporado fuerzas de izquierda que se habían proyectado al calor de la conflictividad reciente y, en especial, de las movilizaciones sociales de 2011. Así, la incorporación del Partido Comunista, de Revolución Democrática, del MAS de Alejandro Navarro y la Izquierda Ciudadana, así como la mejorada relación con el PRO de Enríquez-Ominami, suponía la inyección de una renovada capacidad de movilización y de ampliación de los límites de la acción política. Hoy, sin embargo, es imposible identificar esa prometida contribución. Los nuevos actores incorporados a la Concertación no han tenido una gravitación significativa en la definición del carácter y los alcances del gobierno de Bachelet.

Con todo, es equivocado pensar la insignificancia de la izquierda y el progresismo en la alianza de poder como falta de voluntad política o mera cooptación. El problema, mucho más complejo, pasa por el quiebre que produjo la Concertación al incorporar a estas fuerzas en su órbita de la alianza social que hizo posible el ciclo de luchas 2006-2011. En años anteriores, las mencionadas fuerzas significaron un potencial crítico y movilizador contra el actual modelo de desarrollo. Fue precisamente esa la atracción que el sector supuso para una Concertación que debía recuperar el gobierno en una nueva situación social marcada por un creciente malestar de los sectores medios y la emergencia de actores sociales autónomos.

En definitiva, si en algo ha sido exitosa la Concertación es en la contención de la emergencia de una disidencia político-social articulada desde su izquierda. Lo ha logrado por la vía de desarticular a la que fue, de facto, la conducción de las movilizaciones sociales más importantes de los últimos años, y de subordinar a su iniciativa a ciertas fuerzas que la componían como el PC y RD. Esta subordinación logra, además, limitar el papel de la izquierda histórica y de movimientos que emergían con cierta novedad al mero control burocrático de los actores sociales antineoliberales, cifrando sus posibilidades de proyección en la

corporativización de sus luchas. Lo anterior socava las propias bases de sustentación de estas fuerzas y hace más compleja la proyección de una fuerza política que apueste por una ampliación sustantiva de la democracia.

IV. LA DEMOCRACIA EN RIESGO

La fragilidad de la iniciativa política del gobierno de Michelle Bachelet, su permeabilidad a las presiones de los poderes fácticos y su incapacidad de incorporar nuevos intereses a la política, entraña viejas y nuevas amenazas a la política democrática. Implica no sólo dificultades para el desarrollo de la agenda de políticas definida por el Gobierno, sino también y en un plazo más largo, un debilitamiento de las instituciones constructoras de acuerdos sociales democráticos. Las expectativas de cambios sustanciales que se sembraron durante la campaña presidencial, hoy se ven frustradas ante el peso que siguen ejerciendo los intereses defendidos tradicionalmente por la política nacional.

Estas dificultades son especialmente claras en un momento marcado por la reconquista de protagonismo por parte de las elites económicas. Si el Gobierno de Bachelet les tendió la mano para concitar su respaldo a los ajustes en curso, los grupos económicos se la dieron pero también le tomaron el codo. De esta forma, hoy vemos cómo además de concurrir a la generación de acuerdos “público-privados”, impulsan una campaña para construir un clima de insatisfacción conservadora ante la agenda del Gobierno. El ingreso de fuerzas progresistas a la Concertación busca por un lado legitimar al bacheletismo y oscurecer su carácter pro empresarial y por el otro, disciplinar a las fuerzas sociales, obstaculizando así, la proyección de estos intereses al campo de la política.

En la medida que la alianza gobernante no da cabida a los intereses y actores de los sectores subalternos, ni se abre siquiera a acuerdos parciales con sus fuerzas, se enfrenta con debilidad a las reacciones que su regulación de los mercados desata en el empresariado. Así, la negativa a implementar un nuevo y más amplio pacto social agudiza la crisis de representación. El rechazo a una resolución socializante de las deudas democráticas, en tanto, agudiza las contradicciones propias del agotamiento de la transición y de su proceso económico y social. Las expectativas de reforma comienzan a frustrarse y sus costos a ser pagados por una mayoría social desilusionada. En este escenario podríamos parafrasear al revolucionario francés del siglo XVIII Saint-Just y sus palabras cobrarían plena vigencia: “Quien hace reformas a medias no hace sino cavar su propia tumba”¹¹ ▼

11 La frase original reza “Quien hace revoluciones a medias no hace sino cavar su propia tumba”.

SUSCRIPCIONES:

PARA RECIBIR CADA EDICIÓN DE LOS CUADERNOS DE COYUNTURA EN TU DOMICILIO, CONTAMOS CON UNA MODALIDAD DE DONACIONES Y SUSCRIPCIÓN.

► ¿CÓMO PUEDES APOYARNOS?

1. Comprometiéndote con un aporte mensual de 5.000, 10.000, 15.000 pesos o una cifra mayor en la medida de tus posibilidades.
2. A todos quienes hagan un aporte mensual de 5.000 pesos o más se les enviará a su domicilio cada versión de los Cuadernos de Coyuntura que editamos bimestralmente.
3. Puedes elegir la modalidad de pago entre hacer un depósito bancario o una transferencia electrónica mensual a la Cuenta Corriente de Fundación Nodo XXI.



► ¿QUÉ DATOS NECESITAS PARA HACER TU DEPÓSITO?

- Fundación Nodo XXI - RUT: 65.065.819-1
- Cuenta Corriente N°:
008000240709 - Banco de Chile
- Correo de confirmación:
suscripciones@nodoxxi.cl

► ¿A QUÉ DESTINAMOS LAS DONACIONES?

- A la elaboración y difusión de material de estudio sobre problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales, con una perspectiva de derechos y un enfoque que destaca por su originalidad y compromiso con el cambio social.
- A la organización de actividades de formación de masas críticas a través del debate, la deliberación y construcción de miradas colectivas, especialmente en conjunto con organizaciones y movimientos sociales de relevancia nacional.
- A la elaboración y socialización de propuestas y opiniones relevantes para la apropiación crítica de nuestra realidad, a través de material para medios de comunicación, redes sociales, columnas de opinión y campañas.